

ENTREVISTA

Entrevistada:

Paula Muñoz Chirinos

“Es necesario defender ciertos mínimos de institucionalidad, transparencia y democracia para evitar que el deterioro continúe”

Entrevistadora:

Marianna Elvira Guzmán Sebastián♦

ORCID: 0009-0008-5752-6827

Editor:

Edgar Luna Salazar♦♦

ORCID: 0009-0008-7049-5674

DOI: <https://doi.org/10.18800/politai.202402.009>

-
- ♦ Subdirectora de la comisión de Publicaciones de la Asociación Civil Politai, miembro del Grupo de Investigación del Poder Ejecutivo y Legislativo (GIPEL) y estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
 - ♦♦ Director de la comisión de Publicaciones de la Asociación Civil Politai y Estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Grupo de Investigación del Poder Ejecutivo y Legislativo (GIPEL).

Sobre Paula Muñoz Chirinos

Es profesora asociada del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico e investigadora del CIUP. Ph.D. y M.A. en Ciencia Política (Government) por University of Texas en Austin (Estados Unidos), y bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Es autora del libro *Buying Audiences. Clientelism and Electoral Campaigns When Parties are Weak* (Cambridge University Press, 2019) y co-autora de *Prosecutors, Voters, and the Criminalisation of Corruption in Latin America* (Cambridge University Press, 2023). Cuenta con publicaciones diversas en revistas como *Comparative Politics*, *Governance*, *Revista de Ciencia Política*, *Journal of Democracy*.

Vida académica

Profesora Paula, ha dedicado su carrera al estudio de temas de política subnacional, descentralización, corrupción, entre otros ¿qué la motivó a enfocarse en esos temas y de qué manera su formación académica ha influido en su trayectoria profesional?

¿Qué me motivó? Bueno, en realidad empecé por el tema del clientelismo. Mi experiencia como estudiante de sociología fue clave. A medida que leía más y tenía experiencias de campo, sobre todo en espacios rurales, comencé a reflexionar sobre la intermediación pública. Es decir, sobre la relación entre ciudadanía y Estado, cómo las personas plantean y resuelven sus demandas ante el Estado. Fue entonces cuando me adentré en el tema de la intermediación y, en particular, del clientelismo.

A medida que profundizaba, empecé a interesarme en cómo estas estrategias, procedimientos no formales, personalizados o no institucionales, se utilizan para canalizar demandas y obtener beneficios. En ese proceso, inevitablemente, te encuentras con el tema de la corrupción. Entonces, desde ahí, en el ámbito de la política y las instituciones informales, fui interesándome cada vez más en la corrupción, porque están estrechamente conectados.

Experiencia profesional

En una columna publicada en El Comercio ya hace algunos años, titulada “La Fuerza del Desencanto”, usted discutía sobre los factores que podrían haber motivado el escaso interés en la campaña y el bajo respaldo de los candidatos en la primera vuelta del 2021. En la actualidad, este desencanto se expresa no solo en la baja participación electoral, sino también en movilizaciones y una baja aprobación del Ejecutivo y el Congreso. ¿Qué medidas considera necesarias para restaurar la confianza en el sistema político peruano y fomentar una mayor participación ciudadana?

Es difícil responder, porque no es que puedas recomendar medidas concretas. Parte del desafío radica en que muchas de las acciones necesarias no son solo técnicas, sino políticas. Para trabajar en una mayor confianza ciudadana hacia las instituciones públicas y políticas, se necesitarían una serie de gestos que los actuales actores políticos con poder no están interesados en ofrecer. Más bien, parecen insistir en continuar haciendo las cosas como hasta ahora, ignorando o minimizando las demandas y quejas de la ciudadanía.

Hay muchos cambios en las formas de hacer política que serían necesarios, pero no se trata de medidas que puedan decretarse fácilmente. Estas dependen del interés y la disposición de quienes gobiernan para implementarlas. Actualmente, el principal problema que enfrentamos es que los actores en el poder han pactado en torno a agendas particularistas, informales y, en muchos casos, ilegales. Estas agendas priorizan la impunidad en temas de corrupción y derechos humanos, lo que refleja un desinterés absoluto por atender el bienestar colectivo.

En este contexto, los canales para realizar los cambios necesarios no están disponibles. Los actores en el poder no solo carecen de interés en hacer las cosas de manera diferente, sino que están modificando las reglas de juego y debilitando las instituciones para privilegiar sus propios intereses, dejando de lado las necesidades de la mayoría de los peruanos.

El problema que enfrentamos no es técnico ni de medidas concretas, sino fundamentalmente político. Lo que estamos viendo es un autoritarismo emergente que nos aleja de la democracia. Hablar de ciudadanía o participación en estas condiciones requiere representantes comprometidos con el interés público, pero mientras no los tengamos, será mucho más difícil restaurar la confianza en el sistema político.

Sobre el crimen organizado y corrupción en el contexto actual

En el contexto actual peruano también hemos visto que el crimen organizado parece ser una de las principales amenazas para la seguridad y estabilidad. ¿Cómo evalúa usted la situación actual del crimen organizado en el país? Especialmente en términos de su influencia sobre las instituciones y las comunidades. Además, ¿cuáles son a su juicio los principales retos que enfrentamos para hacerle frente a este fenómeno en el futuro cercano? ¿Y qué medidas estarían siendo necesarias para lograr una respuesta efectiva a largo plazo?

Como te mencionaba, estamos en un escenario donde algunos de los intereses que están permeando la política en el país son, en muchos casos, intereses criminales. Lo que estamos viendo es una agenda política que ha sido capturada, incluso a niveles altos, por actores con vínculos o redes de influencia relacionadas con intereses criminales. Existe una suerte de pacto, donde, si bien no necesariamente hay una representación directa de estos intereses, sí hay una defensa de ciertas agendas por parte de quienes gobiernan. Estas agendas buscan generar impunidad, particularmente en temas de corrupción y derechos humanos, pero también terminan favoreciendo indirectamente a otros tipos de delitos y al crimen organizado.

Por ejemplo, algunos cambios legales recientes que inciden en la lucha contra la criminalidad o en las investigaciones judiciales han sido diseñados para favorecer intereses individuales, pero también terminan beneficiando a redes criminales más amplias. Esto evidencia una preocupante coincidencia en el plano institucional, donde las medidas adoptadas no solo no combaten el crimen, sino que lo facilitan.

Esto es especialmente alarmante porque el pacto actual es relativamente reciente, pero no surgió de la nada. Venimos de un contexto de crisis política prolongada, marcada primero por enfrentamientos y conflictos entre poderes, y ahora por una inercia institucional que ha deteriorado aún más la capacidad operativa del Estado. Instituciones clave, como el sector Interior o la Policía Nacional, se han debilitado debido a la falta de dirección, rotaciones constantes y decisiones que no priorizan el fortalecimiento institucional.

Este deterioro ha permitido que el crimen organizado gane cada vez más terreno. Si bien su presencia en algunas zonas del país no es nueva, ahora se siente con mayor fuerza en diferentes ámbitos, incluyendo áreas urbanas como Lima. El impacto es evidente en el día a día de las personas, con un aumento de la violencia, la extorsión y los asesinatos, afectando tanto a transportistas como a ciudadanos en general.

El reto más grande que enfrentamos es reconstruir la capacidad institucional del Estado para hacer frente a estos problemas. Sin embargo, esto no es solo un tema técnico o de diseño de medidas. Requiere voluntad política y una verdadera disposición para reformar y fortalecer las instituciones clave. Desafortunadamente, los actores que hoy detentan el poder no muestran interés en tomar estas acciones, lo que agrava la situación y permite que el crimen organizado siga expandiendo su influencia.

Como lo ha mencionado, las instituciones de justicia desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, hoy enfrentan ciertas presiones constantes de otros diferentes poderes, como el ejecutivo y legislativo. ¿Cómo diría usted que las estas instituciones de justicia podrían garantizar su independencia frente a los otros poderes gubernamentales? ¿Qué rol deberían asumir para tener esta independencia?

Hemos pasado por varios años marcados por un enfrentamiento constante entre el Legislativo y el Ejecutivo. En ese contexto, el Congreso ha terminado ganando poder de facto, dejando a un Ejecutivo debilitado. Este fortalecimiento del Congreso ha estado acompañado por actos reiterados que buscan minar la independencia y autonomía de otras instituciones, especialmente en el ámbito judicial.

Es crucial garantizar esa autonomía, pero lamentablemente hemos visto avances preocupantes en la estrategia del Congreso por controlar y limitar a las instituciones independientes. Sin embargo, también es alentador observar que, en medio de estas luchas políticas, hay respuestas y reacciones desde diversas instancias, como jueces y fiscales de diferentes niveles, quienes han tomado la iniciativa para defender su autonomía y resistir estas presiones.

Por ejemplo, en el ámbito institucional, hemos visto al Poder Judicial reafirmar su autonomía frente al Congreso al negarse a implementar medidas que consideran inconstitucionales. Además, se ha observado un mayor pronunciamiento público por parte de colectivos de jueces y fiscales, a través de comunicados y otras acciones, que buscan defender su independencia y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre estos temas tanto a nivel nacional como internacional. Un caso reciente fue el testimonio del juez Ordóñez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alertando sobre la situación actual en el país.

En este escenario, la batalla política también se libra en el terreno de la opinión pública. Esto es fundamental para contrarrestar narrativas que, aunque tienen algo de sustento, también buscan desprestigiar a las instituciones autónomas. Por ejemplo, se les ha acusado de ser abusivas o excesivas en la judicialización de casos, lo que ha generado una percepción negativa en ciertos sectores. Aunque es importante defender su independencia, es-

tas instituciones también deben reflexionar sobre cómo sus acciones y decisiones son percibidas, para evitar que esto afecte su legitimidad.

En ese sentido, es clave encontrar un equilibrio: defender la autonomía e independencia de estas instituciones, pero asegurarse de que no se perciban como abusivas o extremas, ya que esto genera rechazo y dificulta su causa. La legitimidad de estas instituciones no solo se basa en su marco constitucional, que claramente les otorga autonomía, sino también en cómo logran construir y mantener la confianza de la ciudadanía y otros actores.

Para culminar, y moviéndonos también a otro espectro, a lo privado, vemos que el este sector privado en muchas ocasiones es percibido como un actor menos comprometido en la lucha contra la corrupción, a pesar de que desempeñe un papel crucial en la economía y política de nuestro país. ¿Cuál debería ser el rol activo del sector privado frente a los casos de corrupción? ¿Qué medidas concretas podrían adoptar las empresas para no sólo prevenir su involucramiento en los actos de corrupción, sino también para contribuir de manera efectiva a la transparencia y la lucha contra la corrupción en el ámbito nacional?

Definitivamente, el sector privado tiene un papel importante que asumir en la lucha contra la corrupción. Como hemos visto, la corrupción suele involucrar a más de una parte, y en muchos casos hay actores del sector privado que participan en esquemas o actos corruptos. Es fundamental partir de este reconocimiento y comprender que, si el sector privado no colabora activamente en esta lucha, no podremos generar los cambios necesarios. Todos perdemos si la corrupción persiste.

En este sentido, es crucial implementar acciones preventivas para evitar la reproducción de estas prácticas. El sector privado puede intervenir revisando sus propios procedimientos y adoptando esquemas de compliance para evaluar riesgos y tomar medidas preventivas, tal como lo ampara la legislación vigente. Además, la participación en espacios gremiales también es una oportunidad clave para dialogar sobre problemas comunes, resolver preocupaciones mutuas y colaborar en la generación de sinergias en la lucha contra la corrupción.

Otro aspecto importante es que el sector privado debe pronunciarse públicamente y sumar esfuerzos para enfrentar el deterioro institucional que estamos atravesando. Este deterioro afecta a todos, y, aunque inicialmente podría parecer que no tiene un impacto directo en la actividad privada, a largo plazo vemos cómo esta situación pasa factura, como sucede con el aumento de la delincuencia y la inseguridad, que son síntomas claros del debilitamiento institucional.

Por ello, es fundamental que todos los sectores actúen, participen y exijan cambios. Es necesario defender ciertos mínimos de institucionalidad, transparencia y democracia para evitar que el deterioro continúe afectando tanto a las actividades económicas como a la sociedad en general. En ese sentido, el sector privado debe continuar avanzando en la coordinación con otros actores y contribuir activamente desde los espacios en los que tiene influencia.

Habiendo tenido esta valiosa reflexión sobre las instituciones estatales y privadas y la importancia que tienen para contribuir a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado damos concluida esta entrevista. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencias con todos los lectores.